

FRANCIA

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN SEPTIEMBRE

El principio del curso se inicia con el **aumento de la gratificación de los trabajadores en prácticas**. En efecto, desde el 1 de septiembre, la gratificación mínima de las prácticas de más de dos meses de duración ha pasado de 3,30 a 3,60 euros la hora. En un mes con jornada completa, la remuneración de dichos trabajadores ascenderá así a 523 euros (frente a 479 hasta el 30 de agosto), lo que supone un aumento de 44 euros. La gratificación de las prácticas más cortas continúa siendo opcional.

Esta medida, que se venía preparando desde hace tiempo, procede de la ley relativa al encuadramiento de las prácticas, prometida en 2012 por el candidato Hollande y adoptada en junio de 2014.

La revalorización ha intervenido con mucho retraso y en dos veces (ya progresó en 43 euros en diciembre último) ya que el Estado quería dar tiempo a las micro empresas y a las pequeñas y medianas empresas para que anticipasen el alza. Se trataba de no cerrar el grifo de las prácticas pues son instrumentos de inserción de los jóvenes en periodos de mucho desempleo, muy valorados y reconocidos.

Esta alza viene a completar la del verano pasado, así como la distribución de vales de restaurante y el reembolso de los billetes de transporte público, también obligatorios si las prácticas duran más de dos meses, cuando la empresa donde se realiza el cursillo los concede a sus trabajadores.

También se la lanzado en los primeros días de septiembre la ofensiva relativa a las propuestas sobre la **reforma del Código de Trabajo** prometida por el primer ministro. El primero en disparar ha sido **el Instituto Montaigne que, en su informe entregado al Gobierno le invita a dejar que las empresas definan su propio Código de Trabajo**.

Con un enfoque bastante radical este foro de análisis y discusión liberal aboga por la reversión total de las normas, que convertiría el acuerdo colectivo -reconocido como "fuente constitucional" del derecho de trabajo- en "la norma de derecho común de establecimiento de las normas generales de las relaciones del trabajo".

En el centro de la reflexión, una doble constatación: la omnipresencia de la ley y los juegos de actores de las negociaciones interprofesionales terminan en "consensos de mínimos" que no reactivan el mercado laboral; por el contrario, "los compromisos al servicio de la competitividad de las empresas y en interés de los trabajadores se pueden realizar en la empresa misma".

En concreto, el Instituto Montaigne recomienda dar casi los plenos poderes a las empresas "para adaptar a sus necesidades específicas" las reglas procedentes del Código de Trabajo, sectoriales y de los acuerdos interprofesionales. Únicamente las reglas relativas a la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores (acoso, igualdad profesional) y a su protección sanitaria permanecerían gravadas *en el mármol de la ley*. Por lo que al resto se refiere, a falta de acuerdo de empresa se aplicarían las reglas establecidas en niveles superiores.

La jornada de trabajo, la forma del contrato (motivos por lo que se recurre a los contratos de duración determinada, duración máxima, etc.) o las causas del despido (por ejemplo, el fin de un proyecto), se volverían a definir mediante acuerdo interno.

Haciendo caso omiso de los tabúes, el Instituto también recomienda autorizar los sectores a pactar una derogación del salario mínimo. El acuerdo colectivo prevalecería sobre el contrato de trabajo, pudiendo éste último modificarse en curso de cumplimiento. Un trabajador que rechazase este nuevo orden sería despedido por causa real y seria, pero con indemnizaciones menores que por un despido “tradicional”.

El informe también quiere generalizar el principio de acuerdo mayoritario (válido únicamente si es firmado por sindicatos que constituyan el 50% de los votos en las elecciones profesionales), y fortalecer la formación de los representantes del personal. Aunque éstos sólo tendrían derecho a dos mandatos consecutivos, limitados cada vez al 50% del tiempo de trabajo para “evitar el desarrollo de un sindicalismo de aparato”.

Las pistas más audaces, que tientan mucho al empresariado pero que son condenadas por los sindicatos y gran parte de la izquierda, no tienen ninguna probabilidad de ser adoptadas por el Ejecutivo, aunque éste desee fomentar los acuerdos de empresa.

La novedad de este mes de septiembre la constituye el **nombramiento**, el día 2, **de la nueva ministra de Trabajo**, Empleo, Formación profesional y Diálogo social, **Myriam El Khomri**, **hasta ahora** secretaria de Estado encargada de la política de la Ciudad, dependiente de Patrick Kanner, ministro de la Ciudad, la Juventud y los Deportes.

La Sra. El Khomri declara: “Mido perfectamente la responsabilidad que es la mía. Cuenten con mi combatividad y determinación al servicio de los franceses”, poco después de su nombramiento.

Entrada en el equipo de Manuel Valls con la última remodelación, sedujo rápidamente al Ejecutivo con su trabajo y su presencia en el campo. Estos últimos meses formaba parte de los miembros jóvenes del Gobierno que con regularidad son citados como ejemplo.

Sin embargo, el derecho del trabajo no ha formado nunca parte de sus especialidades; esto la acerca al perfil de François Rebsamen, que no habrá dejado su impronta en el puesto.

Mientras que el expediente del paro va a ser uno de los más importantes en los próximos meses, su aptitud para la comunicación parece haber guiado la elección del Ejecutivo, que a descartado el perfil de Alain Vidalies, experto del Código de Trabajo pero más incómodo con los medios de comunicación.

La nueva ministra tendrá la gran responsabilidad de asumir la promesa presidencial relacionada con la reversión de la curva del paro, que lleva anexada una eventual nueva candidatura de François Hollande a la elección presidencial de 2017. Mientras las malas cifras del paro se repiten un mes tras otro, la ministra tendrá por misión la aplicación de las conclusiones del informe Combrexelle sobre la evolución del derecho del trabajo, que debería ser entregado al primer ministro a finales de septiembre.

Aunque no se trate de tocar las 35 horas de manera global, sí se fomentarán las negociaciones sectoriales para modificar las condiciones o la jornada de trabajo. El debate podría resultar complicado en el seno del Partido Socialista, bastante ofuscado ya. La Sra. El Khomri deberá, además, dirigir las negociaciones con los sindicatos que se suponen muy difíciles.

Existen cinco expedientes que esperan a la ministra El Khomri:

La reducción de las cifras del paro

El reto es muy sencillo: si el paro no baja de aquí a 2017, François Hollande renunciará a la elección presidencial de ese mismo año.

Una misión y una promesa de talla para la nueva ministra de Trabajo, que es perfectamente consciente de que la primera preocupación de los franceses es el empleo. Por primera vez desde el mes de enero el número de demandantes de empleo ha bajado en julio en un 0,1%. Pero continúa rozando los 3.550.000 de personas sin ninguna actividad.

La reforma del derecho del trabajo

¿Por un derecho del trabajo a la carta? El tema es explosivo. Manuel Valls entiende continuar con la reforma del trabajo, iniciada en 2013 y recientemente con la ley Rebsamen. Aunque no es cuestión de retocar la duración legal del trabajo, el primer ministro quiere dar “más latitud” a las empresas y a los trabajadores para que “decidan ellos mismos”, y mayor peso a los acuerdos de empresa o sectoriales con relación a la ley. Las propuestas del antiguo director general de Trabajo, Jean-Denis Combrexelle, se esperan en septiembre.

En esta cuestión tan sensible se están multiplicando las contribuciones a favor de un Código de Trabajo “a la carta”. Después del libro publicado por el antiguo ministro de Justicia Robert Badinter y el jurista Antoine Lyon-Caen, esta semana se han publicado dos estudios más: la del liberal Instituto Montaigne, y el otro del grupo de reflexión de izquierdas, Terra Nova.

La Conferencia social

La ministra va a tener que dar contenido a la Conferencia social que se celebrará los días 19 y 20 de octubre. El orden del día no ha sido definido todavía pero la COP21 del mes de diciembre debería figurar en él. Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo asistirá pues considera que “la Conferencia social es un verdadero momento de trabajo” y “un buen método”. Sus homólogos de la Confederación general del Trabajo y de Fuerza Obrera, Philippe Martínez y Jan-Claude Mailly, se muestran más escépticos y dejan planear la duda sobre su participación.

Concretar la cuenta personal de actividad

Creada por la ley relativa al diálogo social, la cuenta personal de actividad deberá agrupar el 1 de enero de 2017 las diferentes cuentas ya existentes (penosidad, formación, etc.). Se iniciará la concertación con los interlocutores sociales antes del 1 de diciembre y, si éstos lo desean, podrán abrir una negociación. Los contornos de esta cuenta, que los trabajadores podrán conservar a lo largo de su carrera profesional, serán concretados en un proyecto de ley, en 2016.

Enderezar las cuentas del seguro de paro

Los interlocutores sociales (patronato y sindicatos) van a volver a examinar las normas de indemnización del paro en los próximos meses. El actual convenio expira el 30 de junio de 2016 y la negociación del próximo será seguida muy de cerca por el Gobierno. Las

cuentas de la Unedic están en rojo con un déficit que debería alcanzar los 4.600 millones de euros en 2015 y una deuda de cerca de 26.000 millones.

Según un sondeo realizado por el instituto CSA para el diario Les Echos y el Instituto Montaigne, **el 71% de los franceses están dispuestos a dejar que las empresas establezcan su propia jornada de trabajo, siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo.**

El 69% de los simpatizantes del Partido Socialista son favorables a esta evolución. En el caso de los simpatizantes de derechas, esta cifra alcanza el 83%; el 53% en los simpatizantes ecologistas y el 49% de los simpatizantes del... Frente de Izquierdas (izquierda radical). Resultados que contrastan con la posición de cada una de estas formaciones políticas sobre una posible reforma de las 35 horas. Así, la semana pasada, Manuel Valls llamó la atención al ministro de Economía cuando sugirió que las 35 horas provocaban una "idea falsa" de la izquierda. "Estas cifras muestran la gran diferencia a la que debe enfrentarse el Gobierno", analiza Nicolas Fert, del Instituto CSA.

El primer ministro no deja de repetir que la producción de la norma social ya no puede efectuarse exclusivamente por ley y da a entender que la negociación colectiva en empresa debe ocupar más espacio. Aunque numerosas leyes han permitido flexibilizar las 35 horas, el Gobierno siempre ha excluido modificar la duración legal del trabajo. Un candado que la opinión pública parece estar preparada a abrir. "Pero debe hacerse con el acuerdo de los trabajadores", subraya Nicolas Fert. "Tal vez todas las personas interrogadas no midan concretamente las consecuencias en su caso particular".

Una categoría de trabajadores que sí mide dicho alcance es la de los cuadros, que generalmente es favorable a las evoluciones que permiten liberalizar la normativa social. Esta vez es la más reticente: un 58% están "por", frente al 72% de los empleados y al 73% de las profesiones intermediarias.

Los cuadros fueron los grandes beneficiarios de las 35 horas, con numerosos días libres por la reducción de la jornada de trabajo (RTT), y saben perfectamente que si se reforma el sistema, ahora serían los grandes perdedores.

El paro se estabiliza en el segundo trimestre de 2015.

La nueva ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, ha iniciado su andadura con una buena noticia: su llegada al frente del ministerio se realiza en un contexto económico menos calamitoso que el afrontado por sus predecesores.

En efecto, el Insee ha anunciado la estabilización en un 10% de las cifras del paro en la metrópolis, y en un 10,3% incluyendo ultramar, en el segundo trimestre de 2015.

A pesar de un crecimiento nulo en dicho trimestre, el mercado laboral ha resistido bien gracias a la prosecución de las creaciones netas de puestos de trabajo en el sector mercantil: +27.300.

El periodo ha sido benéfico para los jóvenes, cuya tasa de paro ha bajado en 0,6 punto debido al ligero aumento del trabajo temporal y de los complementos presupuestarios para los contratos subvencionados. Sin embargo, su nivel, un 23,4%, continúa siendo muy alto.

El paro de los 25-49 años se ha deteriorado (-0,2%), pero el de los seniors continúa orientado al alza (+0,6%). El Instituto ha contabilizado 2.900.000 desempleados, es decir, 600.000 de menos que Pôle Emploi. Esta disparidad se explica por las diferencias en la definición y modalidades de su medida.

Ésta es una señal alentadora tras una ligera baja experimentada en las inscripciones de Pôle Emploi en julio pasado, y ello conforta al Ejecutivo en su idea de que “se ha alcanzado una verdadera estabilización” y “alimenta” el “optimismo” que muestra la nueva inquilina de la rue de Grenelle.

El 7 de septiembre se celebró la **6ª. rueda de prensa del presidente de la República**. François Hollande abordó esta rueda de prensa con menos presión que las anteriores, pero siempre con las mismas dificultades: batallar para demostrar que “Francia avanza” y para que los franceses tengan confianza. Confianza en el futuro, confianza en la política que se está llevando a cabo, confianza pues en... el jefe del Estado. Cabe resaltar de la misma:

[Sobre la afluencia de refugiados hacia Europa](#)

El presidente ha repetido que “el derecho de asilo forma parte de la historia” y de “el espíritu” de Francia, y ha anunciado que Francia acogerá a 24.000 refugiados a lo largo de los dos próximos años, sobre los 120.000 que la Comisión Europea desea repartir en los países de la Unión.

François Hollande continúa rechazando el término “cuota” y ha preferido hablar de “mecanismo de reparto obligatorio y permanente” en el seno de la UE, única manera, según él, de evitar el fin del Espacio Schengen y el retorno de las fronteras nacionales. El jefe del Estado ha insistido en la necesidad de tratar el problema en su origen, ayudando a “los países de tránsito”, principalmente africanos, a “retener y acompañar” a los migrantes que no dependen del derecho de asilo.

El Sr. Hollande ha indicado que habrá “centros de control” para identificar a las personas que dependen del derecho de asilo y que las otras serían “acompañadas”. En noviembre se celebraría una conferencia internacional sobre los refugiados en París. Y, asumiendo el riesgo de los sondeos desfavorables, el jefe del Estado ha asegurado que se determinaba “en función del interés mayor del país, de la idea que nos hacemos del país, de sus deberes”.

[Sobre la reforma del Código del Trabajo.](#)

El Sr. Hollande ha confirmado el inicio próximo de esta reforma. Tras la entrega del informe Combrexelle al primer ministro, mañana miércoles, se emprenderán las negociaciones con los interlocutores sociales, antes de la presentación de un proyecto de ley en los próximos meses, “respetuosos del principio del acuerdo por mayoría”.

El presidente se opone al desmantelamiento de las “garantías esenciales” que, según él, son el SMI, el contrato y la duración legal del trabajo en 35 horas. “Sería abandonar el compromiso sobre el que viven los trabajadores y las empresas hoy en día”, dijo. Sin embargo, ha subrayado la posibilidad de abrir negociaciones en los sectores profesionales para “adaptar, abrir nuevos derechos, proporcionar mayor flexibilidad”.

Sobre el desempleo.

François Hollande no ha querido concretar los términos exactos de su promesa de no presentarse a las elecciones presidenciales en 2017 si la curva del paro no se revierte. Ha evitado la cuestión recordando que “el paro era el reto de la campaña de 2012”, aunque admitiendo que la reducción del paro era para él una “exigencia moral”.

Septiembre también ha sido el mes de la **movilización por los refugiados**. El viernes 4, se convocó una movilización de solidaridad con los refugiados. Aunque reivindicado “ciudadano” y “espontáneo”, este movimiento fue fomentado por Rafaël Glucksmann, hijo del conocido filósofo André Glucksmann, a quien los militantes reprochan una voluntad de “recuperación” y demasiada proximidad con otro filósofo, Bernard-Henri Lévy.

Anunciadas más de 20.000 personas en Facebook, algunas asociaciones se decidieron al final de la jornada a participar. Este es el caso de la Cimade. “Debe prevalecer la intención global de movilización ciudadana –defiende su secretario general, Jean-Claude Mas-. Puede que las condiciones emocionales y políticas estén ya reunidas para que se produzca un electrochoque”.

A iniciativa de la Liga de los Derechos Humanos, también se celebró ese mismo viernes una reunión inter asociativa que agrupó a los sindicatos (Confederación general del Trabajo, FSU, Solidarios) y a entidades como SOS Racismo, la Liga internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra) o el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (Mrap). Ésta terminó con una llamada a la movilización para el martes 8 de septiembre. “Presentaremos tres reivindicaciones: la suspensión de los acuerdos de Dublín, la aplicación de la directiva europea relativa a las protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y la organización de una gran conferencia nacional sobre el derecho de asilo”, detalla Françoise Dumont, presidenta de la Liga de los Derechos Humanos.

Según el director general de Francia Tierra de Asilo, Pierre Henry, “existe un rechazo por parte de las fuerzas democráticas a tratar el tema. Hay que ver el número de personas de trabajan en las cuestiones migratorias en el seno de los partidos de izquierda. La política ha marginalizado a la gente que está comprometida en esta cuestión”.

Los ecologistas también comparten esta constatación de una izquierda amorfa; es como si el discurso del Frente Nacional pesara sobre su capacidad para indignarse. “Hemos perdido la batalla con Sarkozy, desde entonces, en ninguna campaña electoral se ha hablado de los refugiados con un enfoque protector, olvidando nuestros reflejos de movilización”, declara Emmanuelle Cosse, secretaria nacional de Europa Ecología-Los Verdes.

Sin embargo, los militantes ecologistas, comunistas, anticapitalistas son los que se encuentran en las luchas locales de defensa de los migrantes. Pero el discurso de sus dirigentes, que defienden una acogida más generosa de los refugiados, continúa siendo desoído.

En cuanto al Partido Socialista, éste ha dado la sensación de correr detrás del acontecimiento: el día 4 anunció, al final de la jornada, que los ediles y los miembros de su dirección estarían presentes el sábado, y que el martes 8, organizará un “gran meeting” parisino, “como apoyo a las ciudades solidarias con los refugiados”.

En el nuevo plan de reparto de los refugiados que la Comisión Europea presentó ante el Parlamento de Estrasburgo el miércoles, 9 de septiembre, Francia deberá acoger a 24.031 refugiados.

Otro acontecimiento importante de este mes de septiembre ha sido la entrega al primer ministro del **informe** elaborado por la comisión **Combexelle**, en el que se recogen diversas **pistas para una reforma choque del Derecho del Trabajo**.

Manuel Valls encargó en el mes de abril al antiguo director general de Trabajo, Jean-Denis Combexelle, un trabajo de reflexión sobre medidas que permitan “ampliar el espacio del convenio colectivo en nuestro derecho de trabajo” y es una profunda evolución del mismo la que el Sr. Combexelle propone en su informe. Aunque no entrega todas las llaves a las empresas, como lo aconseja el Instituto Montaigne en su propio informe, sí sugiere reducir singularmente el lugar de la ley en el edificio jurídico-social francés y, de paso, modificar la Constitución en este sentido, “recogiendo en su preámbulo los principios de la negociación colectiva”.

La 26ª propuesta (de las 44 que recoge el informe) es, sin duda alguna, la más atrevida. El informe recomienda el proyecto “a corto plazo, es decir, en un plazo máximo de cuatro años, de una nueva arquitectura del Código de Trabajo, que diferencie las disposiciones imperativas, el reenvío a la negociación colectiva y las disposiciones supletorias en defecto de acuerdo.

Jean-Denis Combexelle quiere limitar el carácter imperativo de la ley a las normas de orden público social (las 48 horas de jornada máxima de trabajo semanal en materia de tiempo de trabajo, el SMI en materia salarial). Lo principal sería tratado a nivel sectorial, acelerando la negociación a tres años. Los sectores deberán definir “el orden público convencional que se aplicará a la totalidad de las empresas del sector y que será oponible, bajo reserva de la aplicación del principio de favor [de ser más ventajoso para los trabajadores], a la totalidad de los acuerdos de empresa”, cuya validez sería limitada a cuatro años.

A corto plazo, es decir “a lo largo del año 2016”, el objetivo serán los ámbitos social y económico; el desarrollo de la negociación colectiva y, en consecuencia, la adaptación de las disposiciones del Código de Trabajo, corre urgencia. En este caso, “los cuatro pilares de la negociación: el tiempo de trabajo, los salarios, el empleo y las condiciones de trabajo”, como los denomina el Sr. Combexelle.

Otro punto clave: “cuando el empleo está en causa y el acuerdo debe protegerlo, mantenerlo, preservarlo y desarrollarlo, el acuerdo y el interés colectivo que encarna prevalecen sobre el interés individual concretizado por el contrato de trabajo”, escribe Jean-Denis Combexelle. En caso de que un trabajador rechace las consecuencias del acuerdo sobre su contrato de trabajo, el informe no propone volver sobre el hecho de que se beneficia de un despido por causa económica, pero sí recomienda una indemnización específica por despido “menos atrayente”. Esto afectaría a los acuerdos de movilidad, de gestión provisional del empleo y las competencias [del trabajador] (GPEC) y de mantenimiento en el empleo.

A continuación se indican las pistas que, según los autores del informe, abrirían nuevos espacios a la negociación:

- **Elaborar una pedagogía de la negociación colectiva** demostrando el carácter racional y necesario de ésta en un contexto de competencia y de crisis económica, y establecer una confianza recíproca.
- **Actuar sobre las representaciones**, principalmente mediante acciones de sensibilización, formación, organización de las direcciones de recursos humanos, para valorizar el diálogo social.
- **Fomentar la evolución de las condiciones de negociación** y sus “reglas del juego”: los acuerdos sobre el método deben ser un requisito para que haya negociación.
- **Importancia del “factor tiempo”**: Actuar sobre el tiempo de la negociación, limitar la duración de los acuerdos sectoriales y de empresa, repasar las reglas de revisión y evolución en el tiempo de los acuerdos, limitar en el tiempo las condiciones del recurso judicial contra los acuerdos colectivos.
- **Mejorar la legibilidad de los acuerdos**, facilitar su comprensión e interpretación, definir las condiciones de información directa de los trabajadores sobre el contenido de los acuerdos, compartir los conocimientos sobre la negociación colectiva.
- **Confirmar el papel del Estado como responsable** (acompañante de la negociación y responsable de la legalidad de los acuerdos): mantenimiento del procedimiento de extensión de los acuerdos sectoriales, posibilidad de controlar la legalidad de los acuerdos de empresa y limitación de los temas sometidos a la “negociación administrada”.
- **Valorizar las prácticas del diálogo social informal.**
El jefe del Gobierno, que lleva personalmente este expediente, quiere convertirlo en uno de los marcadores fuertes de la izquierda en el poder. Aunque una vez más corra el riesgo de agitar “el trapo rojo” ante su mayoría y los sindicatos.

Por su parte, el jefe del Estado -que comparte la visión de su primer ministro- no tiene intención alguna de llevar a cabo una revolución social a tres meses de las elecciones regionales y a menos de dos años de las presidenciales. François Hollande se cuidó mucho de poner límites a la reforma: las “garantías esenciales” como la duración legal del trabajo, el contrato de trabajo y el salario mínimo, no se tocan. Una manera de cerrar las puertas a las proposiciones del informe Combexelle sobre una posible modificación de las 35 horas o el derecho a experimentar para generar normas sociales particulares en el sector de la “economía digital”.

El presidente de la República también ha puesto límites en términos de método: cualquier derogación por parte de la empresa deberá efectuarse “por acuerdo mayoritario”. Por lo tanto, será necesaria la firma de los sindicatos que hayan recogido al menos el 50% de los votos en las elecciones profesionales (frente al 30% en la actualidad), para que tal decisión pueda ser aplicada.

Una garantía dirigida a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, interlocutor sindical privilegiado del Ejecutivo desde el principio del quinquenio, que reclama este límite. “Lo que denominamos “Código de Trabajo” no es cierto número de páginas. Finalmente estará bien adaptado a la situación de las empresas”, ha prometido el Sr. Hollande.

Sin embargo el poder quiere flexibilizar y ello rápidamente. La reforma será uno de los capítulos principales de las Conferencia Social del 19 de octubre, que deberá terminar en proyecto de ley para ser presentando en Consejo de ministros a principios de 2016. El texto será defendido por la nueva ministra de Trabajo,

Myriam El Khomri, vigilada muy de cerca por el presidente de la República y el primer ministro. “

El sábado 12 de septiembre, el ministro del Interior Bernard Cazeneuve, propuso una **pequeña ayuda a los 700 alcaldes venidos a París para una reunión de trabajo sobre los refugiados**.

Mientras se multiplican las declaraciones de buenas intenciones, el Gobierno ha decidido conceder una cantidad de 1.000 euros por refugiado con objeto de que la acogida “no ocasione cargas suplementarias a las colectividades locales”. El objetivo es compensar los gastos de alojamiento, asunción, acceso a los diferentes cuidados y a la escolarización. Los propietarios públicos y privados que proporcionen locales también cobrarán 1.000 euros por vivienda.

Estas ayudas se agregan a las disposiciones de derecho común soportadas por el Estado, tales como la financiación de las obras llevadas a cabo por la Agencia nacional de Mejora del Hábitat (ANAH), o la garantía Solibail propuesta a los propietarios privados que alquilan a una asociación. También ha sido anunciado un fondo de apoyo a la inversión para la rehabilitación de viviendas, principalmente en zonas sin presión inmobiliaria.

Jurídicamente es el Estado el responsable de la acogida de los refugiados. Bruselas ha prometido 6.000 euros por refugiado. “Esta historia no está clara; el Estado no puede quedarse con 5.000 euros y darnos sólo 1.000”, afirmó ayer un edil recordando que las estructuras reservadas a los demandantes de asilo -los CADA- están, a día de hoy, completas en un 98%.

Francia cuenta con 25.000 plazas en el ámbito de 34 estructuras, de las que 23 son asociativas. Hay que crear más con toda urgencia, en un mercado inmobiliario difícil, alojamientos para las familias y disponer de asociaciones capaces de acompañarles. Louis Gallois, presidente de la Federación nacional de las Asociaciones de Acogida y Reinserción social, ha evocado la necesidad de 20.000 plazas más.

Al término de la reunión, Caroline Cayeux, presidenta de la asociación Ciudades de Francia, ha declarado que, “razonablemente, 1.000 euros no serán suficientes para cubrir los gastos”. El coste medio de una plaza de alojamiento de urgencia era, según estimaciones, de 16,37 euros al día en 2013, según documentos del ministerio del Interior.

De forma inmediata, el esquema que se ha adoptado es el de orientar al millar de refugiados procedentes de Alemania que Francia se ha comprometido a acoger, hacia la región parisina o sus cercanías, en una decena de centros. Se trata de permitir el estudio de su expediente para después alojarlos rápidamente en dicho territorio.

En la región parisina se van a abrir próximamente ocho centros de acogida y otros 26 están siendo examinados para su posible uso. Alojamientos propuestos por el turismo social, los albergues de la juventud, los comités de empresa, la Asistencia pública y La Poste (Correos). Pero para los propietarios no van a haber beneficios adicionales: “No vamos a renovar edificios demasiado vetustos”, advierte Sophie Brocas, secretaria general de la prefectura de la Isla de Francia.

La movilización se ha extendido al mundo de la empresa. Cuatro grandes grupos, Air Liquide, Michelin, Sodexo y Total se han comprometido a ofrecer locales, hacer donar

alimentos y productos de primera necesidad, o también acompañamiento profesional. AXA ha concedido un primer presupuesto de 1.000.000 de euros.

La reforma del derecho de asilo votada en julio pasado prevé un esquema nacional de acogida que establece el reparto de plazas en el territorio. Ha sido decidido por el ministro encargado del Asilo.

En su discurso de clausura de la reunión, el primer ministro también ha prometido a los demandantes de asilo cuyo expediente se desestime, que serán reconducidos a la frontera. El debate en la Asamblea Nacional dedicado a los migrantes se espera animado.

Y tras los alcaldes, **el ministro Cazeneuve también ha movilizado a los prefectos** enviándoles una circular también el sábado 12 de septiembre, concretando su papel en el programa nacional de acogida de los refugiados.

“Conviene ahora mantener y aprovechar el movimiento de movilización que se ha verificado estos últimos días para que Francia pueda acoger a estas 30.000 personas en dos años”, especifica ya en las primeras líneas de su circular, antes de subrayar que será a ellos “de llevar a cabo la estructuración de las iniciativas locales”. Un papel esencial en una movilización con múltiples formas, de alcaldías, ciudadanos y empresas.

La cifra evocada en la circular hace referencia a las 24.000 personas que Francia se ha comprometido a acoger en el transcurso de los dos próximos años, a las que hay que sumar las 6.572 que Francia prometió aceptar, en julio, y al millar que la Oficina de los Refugiados y apátridas (OFPRA) debería haber traído de Alemania, al final de la semana, para aliviar las llegadas masivas a dicho país.

El ministerio del Interior pide pues a sus representantes en los territorios que sean los encargados de gestionar este movimiento de generosidad. De una amplitud menor que en Alemania, el deseo de ayudar a los sirios en el exilio ha venido manifestándose poco a poco, intensificándose el fenómeno a principios de septiembre.

Bernard Cazeneuve pide a los prefectos que sustituyan a los alcaldes a escala local, invitándoles a nombrar “rápidamente un coordinador departamental que deberá reunir todas las ofertas de cualquier naturaleza que sean, y que emanen de las colectividades territoriales y de la sociedad civil. Los alcaldes podrán cifrarlas más tarde en su territorio”.

En efecto, es imperativo evitar cualquier pérdida; la apuesta que realiza el Gobierno, de ser capaz de acoger y alojar a más de 30.000 personas en dos años es un verdadero reto. Actualmente, sólo un tercio de los demandantes de asilo son alojados en estructuras adaptadas y faltan numerosas viviendas en el país.

Con el fin de “facilitar la coordinación permanente entre el Estado y los ediles” y “organizar esta acogida”, se ha nombrado a un prefecto coordinador nacional de la acogida de los refugiados. Kléber Arhoul, que acaba de recibir su hoja de misión y que ya se ha puesto a trabajar, tendrá una función de interfaz y deberá amplificar más el impulso para “favorecer la emergencia de proyectos” y “movilizar a otros actores que todavía no se han manifestado”.

Su hoja de misión especifica el método de trabajo puesto que será él quien deba “iniciar rápidamente intercambios con las colectividades, organismos públicos, asociaciones y portadores de iniciativas procedentes de la sociedad civil, con objeto de puntualizar sus intenciones y ayudarles a concretar los proyectos que origine su buena voluntad”.

Esta misión será tanto más delicada cuanto que una vez pasada la primera emoción el Sr. Arhoul, que hasta ahora era prefecto delegado para la igualdad de oportunidades ante el prefecto de la región Norte-Paso de Calais, deberá gestionar las reticencias locales en la instalación de alojamientos para los demandantes de asilo o de viviendas para refugiados, que no dejarán de surgir. Será pues el prefecto Arhoul quien deba “imaginar actuaciones para favorecer la aceptación local de los proyectos”.

Aunque el alojamiento y la vivienda son prioritarios en este expediente, el acceso a la enseñanza de la lengua francesa y el empleo figuran también en la hoja de misión de Kléber Arhoul. Una manera de tomar medidas a largo plazo, al lado de las urgentes.

En una entrevista concedida al diario Libération, Philippe Martínez, secretario general de la Confederación general del Trabajo llama a una **jornada de movilización el 8 de octubre** próximo, **pues** según él con el informe Combrexelle **peligra la igualdad de los salarios ante la ley**

Interrogado sobre la recomendación del informe Combrexelle de que el acuerdo colectivo prime sobre la ley, éste contesta que la posición del Gobierno es muy ambigua. “Por un lado, se nos asegura que no se van a tocar ni el salario mínimo ni la jornada de trabajo, pero, por otro lado se nos dice que las empresas podrán hacer lo que quieran. El riesgo es tener normas de referencia que, en los hechos, no son aplicables puesto que se pueden derogar. Estamos en contra de una ley que invertiría la jerarquía de las normas. Sería como si cada empresa tuviese su propio Código del Trabajo en función de su talla y de la presencia sindical. Y esto pondría en peligro el principio de igualdad de los salarios ante la ley. Es contrario a los valores de la República.

En cuanto al hecho de que el primer ministro haya cerrado la puerta a la modificación de la jornada de trabajo, el Sr. Martínez afirma que, él se basa en la realidad, el Código de Trabajo se deroga; y cita como ejemplo lo que acaba de ocurrir en la empresa de coches Smart, en la que la dirección ha propuesto a los trabajadores trabajar 39 horas pagándoles sólo 37.

Por lo que respecta a sus recientes declaraciones en las que se decía “favorable a aligerar el Código de Trabajo”, Philippe Martínez confirma sus palabras y declara que hay que retirar del Código todas las derogaciones empresariales. “No estamos en contra de las negociaciones de empresa o sectoriales; somos incluso favorables cuando éstas permiten mejorar las condiciones de trabajo”.

También es favorable al alza del umbral de validez de los acuerdos de empresa con el 50% de los votos en las elecciones profesionales. Según él, es “un plus” para la democracia social que reclaman desde el 2008. Pero es algo que “se debe organizar” porque “en las negociaciones, la firma de un acuerdo está vinculada con frecuencia a otra cosa; por ejemplo al cierre de la fábrica o a despidos.” “Si la democracia es elegir entre si amputarse el brazo derecho o el izquierdo, esto no es posible”. “En el terreno, los sindicatos debemos tener tiempo y medios para explicar el contenido de un acuerdo; pero esto nos ha sido rechazado en la ley Rebsamen”, afirma.

Philippe Martínez aboga por un diálogo social en las empresas en mejores condiciones, pero al mismo tiempo amenaza con no participar el día 19 de octubre en la Conferencia Social: “Actualmente estamos ante un monólogo social más que en un diálogo. El Gobierno no se ha dado por enterado con el fracaso de las últimas negociaciones entre interlocutores sociales. Deberá modificar las modalidades para que no nos basemos siempre en un texto escrito por la patronal...”. En cuanto a la próxima Conferencia Social,

“de momento no se sabe qué temas se van a debatir. Si es para romper el Código de Trabajo, no iremos. Si es para hablar de salarios, o de las 32 horas, iremos corriendo”, dice el Sr. Martínez.

Es indispensable, según él, volver a poner las 32 horas sobre la mesa pues “la última reforma que permitió crear empleos en Francia, de manera significativa, fue la de las 35 horas”. No reclama un informe detallado de la situación, pero quiere saber si el problema son las 35 horas o los regalos hechos al empresariado.

A la pregunta de si por ello estará en la calle el 8 de octubre, para pedirle al Gobierno que cambie de rumbo, Martínez contesta que se les ha vendido el Pacto de Responsabilidad como una “panacea”, pero desde 2013, “han sido muchas las ayudas dadas a las empresas y ninguna a los trabajadores”. “[...] desde hace tres años se está haciendo la corte al empresariado, diciendo que el trabajo tiene un coste que es necesaria la flexibilidad. No hay ruptura con las políticas anteriores. Y cada vez hay más desempleados.”

A pesar de todo, las últimas citas sindicales no han atraído a mucha gente. “Cuando la Confederación general del Trabajo dice cosas no autorizadas en “ambientes autorizados”, va a contracorriente. “Pero no quiere decir que esté equivocada. Y la naturaleza de lo que ha ocurrido en Grecia no empuja a la movilización: el contexto internacional también pesa”.

Sobre el número de sindicatos, que no deja de disminuir en Francia, el Sr. Martínez declara que la Confederación general del Trabajo tiene más adherentes que la totalidad de los partidos políticos: entre 670.000 y 680.000 en 2014.

El Tribunal de Cuentas francés en su voluminoso informe anual sobre la Seguridad Social, ve alejarse el equilibrio financiero del organismo que, dice, no tendrá lugar, por lo menos, hasta dentro de seis años. También critica la falta de fecha límite oficial para una rectificación.

Según sus cálculos, “con un déficit del orden de 5.000 millones de euros en 2018 y un ritmo de minoración de este último de 2.000 millones al año, en término medio, como se viene observando desde 2012, el retorno al equilibrio no se alcanzará en el horizonte 2020 sino más bien en 2021”.

Si esta proyección se revela exacta, el déficit de la Seguridad Social duraría cerca de 20 años. Sin embargo, la persistencia de los déficits sociales, que aumenta la deuda social (158,8 mil millones para amortizar en 2015, es decir, 400 millones más en un año), es una anomalía que el Tribunal de Cuentas denuncia todos los años porque no es sano financiar gastos corrientes a crédito.

La Seguridad Social que festeja sus 70 años dentro de unos días, “corre peligro, está fragilizada por sus déficits persistentes, por la erosión de la protección que garantiza y por el aumento de una deuda social de la que una parte cada vez más alta no es visible ni financiada”, deploró ayer martes Didier Migaud, primer presidente del T.C. Y ha pedido a los poderes públicos que tomen opciones para “ir más lejos” y “más deprisa”.

El objetivo del equilibrio en 2017 ha sido abandonado. En su informe, el T.C. recuerda que no es suficiente respetar los objetivos formales de control de los gastos. En 2014, el déficit de la Seguridad Social (Fondo de Solidaridad Vejez incluido) pasó de 15,4 a 13,2

mil millones de euros, pero habría sido necesario, según los magistrados financieros, atacarse a su componente estructural (unos 4.000 millones).

El año pasado, la progresión de los gastos continúa siendo superior a la del PIB. Y 2015 debería experimentar una “inflexión pronunciada” en la reducción de los déficits, lo cual no está previsto, aunque una ligera mejoría podría ser anunciada el 24 de septiembre por la Comisión de Cuentas. El Tribunal no digiere el abandono del objetivo de retornar al equilibrio en 2017, votado hace dos años en la Ley de Financiación de la Seguridad Social y que, desde entonces, ha volado por lo aires.

Mientras el déficit del régimen general y del FSV debería haber si reducido de 13,2 mil millones a 9.000 millones en 2015, para luego mostrar un excedente de 700 millones en 2017, la nueva trayectoria se establece en -13 mil millones en 2015, -10,2 mil millones en 2016, -5,7 mil millones en 2017 y -4.000 millones en 2018.

El crecimiento de la masa salarial estaba previsto en un 3,5% en 2016 y en un 4,2% en 2017-2018. Las nuevas hipótesis para los tres próximos años no son ya más que de un 2,7%, un 3,1% y un 3,6%. Los ingresos serán pues menos altos de los previsto y no serán parcialmente compensados por la ralentización de los gastos, aunque la inflación más débil de lo previsto en 2015 debería conducir a una no revalorización de los pensiones el 1 de octubre.

El T.C. fustiga al Gobierno en relación con el retraso tomado en la reducción del déficit, que impide reabsorber la deuda social. Y el Gobierno deja que los déficits se acumulen de nuevo en el seno de la AcoSS (el banco de la Seguridad Social), que se ve obligada a financiarlos con emisiones de deuda de corto plazo. Estima que esta deuda debería ser transferida a la Caja de Amortización de la Deuda Social, con un alza de la tasa CRDS para garantizar la amortización de la deuda en el plazo previsto, es decir, en 2024.

Ante la amplitud de la crisis de los refugiados, **Francia dispuesta a restablecer los controles en sus fronteras**. Según declaraciones del primer ministro ante la Asamblea Nacional, “ya lo hicimos esta primavera pasada de forma temporal [en el departamento de los Alpes Marítimos] y no dudaremos en volverlo a hacer tal y como lo permiten las normas de Schengen, cada vez que las circunstancias lo impongan, principalmente, en los próximos días o semanas”.

En realidad Manuel Valls apuesta por hacer frente a una situación sin precedentes en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Por una parte, es imposible ignorar el drama de los refugiados que “mueren a nuestras puertas”, ha recordado. Por otra, no es cuestión de que Francia se deje desbordar por una afluencia incontrolable, como ha ocurrido en Alemania. Ésta ha restablecido ya controles en su frontera con el Hexágono.

Francia también va a establecer medios suplementarios para acoger a los refugiados (279 millones de euros presupuestados de aquí a final de 2016) y luchar contra la inmigración clandestina con refuerzos policiales (+900 agentes). “Humanidad y solidaridad, pero también seriedad y control”, ha resumido Manuel Valls.

Al mismo tiempo, el Gobierno no piensa abandonar el alojamiento de urgencia para no ser acusado de preocuparse sólo y únicamente de los extranjeros desamparados. A este tema serán dedicados 250 millones de euros más.

A los ojos del primer ministro, sólo Europa puede aportar una situación duradera a la crisis. Todo un desafío cuando las fracturas en el seno de la Unión son cada vez más

fuertes. “Varios países han rechazado jugar el juego, esto es inaceptable”, fustiga Manuel Valls que se ha cuidado de no citar ningún país.

Las empresas y las asociaciones también se movilizan por los refugiados. Un campamento ha sido evacuado cerca de la estación de Austerlitz el jueves, 17 de septiembre. Esta operación interviene al día siguiente del desbloqueo por el Estado de 279 millones de euros suplementarios para la acogida de los refugiados y dichas operaciones vienen a ilustrar la complejidad de gestión de este tema por parte de los poderes públicos y la sociedad civil.

Procedentes de Alemania, cerca de 600 sirios e irakíes han sido alojados directamente en la región parisina, y deberían obtener su carnet de refugiado en unos 15 días. En cuanto a las 800 personas evacuadas a París, éstas han sido dirigidas a distintos centros en espera de que depositen su demanda de asilo.

Por parte de la sociedad civil, las iniciativas se han multiplicado. “Las cosas se mueven de manera positiva. Hay que dejar de pensar que el Estado lo debe hacer todo”, insiste Pierre Copey, director general delegado de **Vinci**, encargado de las concesiones, pero también presidente de la asociación Aurora, que cuida y alberga a más de 20.000 personas que se encuentran en situación de urgencia.

Además, Jean-Marc Borello, presidente del **grupo SOS**, ha propuesto alojamientos individuales. Viviendas del parque privado alquiladas por la asociación que acogen ya a familias enteras seguidas por los trabajadores sociales de SOS. “Es posible crear redes de 30 a 35 viviendas y su seguimiento por un centenar de personas, por proyecto. Ya hemos empezado a alquilar”, explica el patrón, que alberga a 800 personas en París y se dice dispuesto a asumir de 3.000 a 4.000 personas en la región parisina.

En cuanto al patrón de **Emmaüs Solidaridad**, Bruno Morel, éste recuerda que las ONG necesitan ropa y productos de higiene, que se pueden depositar en las alcaldías de los distritos.

Las empresas también se movilizan. **BNP Paribas** ha lanzado un plan de apoyo de 5 millones de euros, repartidos entre los fondos de urgencia del banco y su fundación. Y se ayudará a los trabajadores comprometidos en programas de apoyo vía las asociaciones. El banco multiplicará por dos los donativos recogidos.

EDF ha prometido 200.000 euros por vía de su fundación. La semana pasada, **Air Liquide, Michelin, Sodexo y Total** también se comprometieron a ayudar. Este planteamiento surgió en los encuentros de Evian. Servir de vínculo entre las buenas voluntades y las familias es complejo. **Sodexo** propone comidas en de sus cocinas centrales; el grupo cuenta con 70 en todo el Hexágono. Ya toma a su cargo las comidas de 50 personas en Suresnes y de 85 en Versailles. **Michelin** ha propuesto poner a disposición sus centros de formación con el fin, principalmente, de enseñar el francés a los refugiados. Pero se encuentran en Clermont-Ferrand (región de Auvernia) y en Tours (región Centro) y es necesario hablarlo con los ediles. **Total** debate con los sindicatos sobre a puesta a disposición de sus centros de vacaciones, pero también ha prometido asumir los gastos de acogida de refugiados. “Hay que demostrar que se puede actuar rápidamente”, afirma un portavoz de la compañía petrolífera.

Se prevén **nuevas medidas de lucha contra el fraude de trabajadores desplazados**. La nueva ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, está preparando una ley sobre el espacio que debe ocupar la negociación colectiva en las empresas, visitó el Consejo

Económico, Social y Medioambiental durante el voto, en sesión plenaria, de un dictamen relativo a los trabajadores desplazados. El proyecto fue votado por unanimidad de la sección de Trabajo, en la que participan patronato y sindicatos.

El CES había sido solicitado por el primer ministro, Manuel Valls, para que emitiese un dictamen en relación con este tema, de gran importancia para el Gobierno. El proyecto propone fortalecer más la responsabilización de los empresarios, que las leyes Savary y Macron ya habían incrementado bajo un nuevo ángulo: el de los mercados públicos. En teoría y desde hace ya muchos años, los empresarios deben rechazar las ofertas anormalmente bajas. Pero, en la realidad, es la oferta más baja la que gana aunque su precio sea aberrante.

Propuestas

Se proponen dos medidas: en el caso de que una empresa recurra a trabajadores desplazados deberá incluir este extremo obligatoriamente en las respuestas a las licitaciones, y que “el criterio de costo de mano de obra, incluidos los subcontratistas [sea] sistemáticamente tenido en cuenta”. Se agrega la posibilidad de las organizaciones empresariales de poder “intentar acciones por el procedimiento de urgencia contra las ofertas anormalmente bajas”.

El proyecto de dictamen incluye igualmente una parte relativa a los problemas vinculados a los accidentes de trabajo, que ilustra la muerte en la ciudad de Dunkerque de dos trabajadores desplazados durante la construcción de un buque destinado al transporte de metano. Igualmente lucha contra el incumplimiento de la ley relativa a la remuneración mínima (SMI y aplicación de la horquilla de salarios del convenio colectivo). Propone igualmente prohibir la inclusión de los gastos e indemnizaciones de alejamiento en el salario. También desea imponer la inclusión de datos relativos al recurso a los trabajadores desplazados, en la cadena de la subcontratación.

El Consejo Económico y Social Europeo (Cese), que recomienda contratar a 200 agentes suplementarios para controlar el desplazamiento de trabajadores, propone inspirarse del ejemplo belga y crear “un servicio con competencias nacionales, que se encargue de recoger y centralizar las declaraciones previas de las empresas, los prestatarios o los dueños de la obra.

Finalmente, un punto sobre el que el Cese no debería esperar para ver sus recomendaciones concretizadas, es la Circular penal que establece la necesidad de fortalecer la eficacia de la justicia. Ésta se encuentra en preparación.

Los servicios públicos del empleo quieren **simplificar la inscripción de los demandantes de Empleo**. La “nueva trayectoria del demandante de empleo” acaba de ser lanzada en las agencias piloto de Pôle Emploi antes de su generalización en 2016.

Internet debe permitir optimizar el trabajo de los consejeros de Pôle Emploi, puesto en peligro por el alza del número de desempleados. Esta es la opinión de su director general, Jean Bassère, quien ha puesto lo digital en el centro de la reorganización y modernización de los servicios públicos del empleo.

De forma paralela al impulso dado a los servicios accesibles en línea (para formarse, acceder a un máximo de ofertas, intercambiar con su consejero, etc.), Pôle Emploi se prepara a dar un nuevo paso con el lanzamiento de “una nueva trayectoria del demandante de empleo”, en Córcega desde el lunes, y en tres otras regiones

próximamente (Guayana, Franco Condado y Picardía), antes de su generalización a principios de 2016.

La idea directriz es acelerar y fluidificar la inscripción en Pôle Emploi y las gestiones vinculadas a la prestación de paro, empujando a los nuevos demandantes de empleo a hacerlo en línea. Será accesible una asistencia telefónica gratuita, pero ésta también podrá continuar obteniéndose en las agencias. Unos 1.800 jóvenes voluntarios del servicio cívico deberían unirse a Pôle Emploi con el fin de ayudar y guiar en las gestiones a aquellos desempleados que lo necesiten.

El demandante de empleo deberá proporcionar elementos sobre su carrera profesional y su búsqueda de empleo con el fin de facilitar el establecimiento de un diagnóstico por parte de su consejero. “El objetivo es que, remontando en la vida profesional del desempleado podamos diagnosticar y preparar un proyecto profesional ya desde la primera entrevista con su consejero referente, que intervendrá en un plazo máximo de dos meses, frente a cuatro en la actualidad”, insiste Jean Bassère.

Y no será la única novedad de Pôle Emploi en 2016. Según el Sr. Bassère estos servicios deberían poder contar con una dotación del Estado “estable”. El organismo también va a generalizar tardes en las que las agencias sólo serán accesibles a los demandantes de empleo que hayan concertado una cita con su consejero, con objeto de retirar a éstos de la gestión de los flujos.

La especialización de los consejeros se proseguirá con el despliegue, ya finalizado, de 4.000 consejeros de empresa (ayuda a la definición de las necesidades y a la contratación), y con el que está en curso de 1.200 consejeros dedicados al control de la búsqueda de empleo idónea por parte de los desempleados.

Pôle Emploi también desea desarrollar de aquí al verano de 2016 una oferta de servicios sobre la movilidad internacional. El organismo trabaja igualmente en la creación de nuevos servicios dedicados a las microempresas y a los desempleados con una actividad reducida. El año próximo se lanzarán experimentaciones cuyas modalidades todavía se encuentran en el estadio de la reflexión.

La Comisión de Cuentas de la Seguridad Social (CCSS) mejora sus previsiones de déficit.

En su último informe, que se hizo público el 24 de septiembre, la CCSS prevé una ligera reducción del déficit de la Seguridad social en 2015, situándolo en 12.800 millones de euros. Una cifra que mejora los resultados del año precedente: 400 millones de euros menos que en 2014.

La mejora no afecta por igual a todos los riesgos y regímenes cubiertos por el sistema: en el régimen general, el déficit alcanzaría los 9.000 millones de euros. En este régimen, el seguro de enfermedad empeoraría sus resultados con respecto a 2014 en 900 millones de euros suplementarios, lo que situaría el déficit de 2015 en 7.400 millones de euros. Esto se explica por una progresión del gasto (3,4%) mas importante que la de ingresos (2,9%), detalla el informe de la CCSS.

Sin embargo, el seguro de vejez mejora. Después de un decenio de déficit, en el año 2016 sería excedentario. En 2015, este déficit sería de 600 millones de euros, inferior al de años precedentes. Según la CCSS, estos buenos resultados se explicarían por el

aumento de la edad legal de la jubilación de 60 a 62 años y la baja inflación, que implica revalorizaciones de pensión cercanas al 0%.

A pesar de todo, no se espera que las cuentas de la Seguridad social alcancen el equilibrio antes del año 2020 o 2021, indica la CCSS. Estas previsiones concuerdan con las del Tribunal de Cuentas hechas públicas el pasado 15 de septiembre, que predecía un déficit de 5.000 a 6.000 millones de euros en 2018 y *el equilibrio financiero en 2021*.

Francia presupuestará 100 millones de euros en 2 años para los refugiados

El presidente del Gobierno anunció en Bruselas que se destinarán 100 millones de euros para ayudar a los refugiados. El presidente hizo estas declaraciones al término de la cumbre europea sobre los refugiados.

Preguntado por la suma global de 1.700 millones de euros para hacer frente a la crisis, ha informado que “son créditos incluidos en el presupuesto de la UE afectados a los refugiados y principalmente a los de Siria”.

Pero también deberán contribuir los países, que deberán aumentar los medios de los inicialmente previstos, ha declarado François Hollande. “Estos medios (los 100 millones antes citados) se destinarán a los campos de refugiados para que estos hombres, mujeres, familias, puedan vivir dignamente”. “Este dinero no supondrá el aumento del gasto para el Estado puesto que si los refugiados vienen a Francia en aplicación de las normas sobre el asilo, los acogeremos y esta acogida supone también un gasto”, afirma el presidente francés. “En consecuencia, en nombre del derecho humanitario y del interés de las poblaciones consideramos que es mejor ayudar a los refugiados allí donde se encuentren”.

El mes de septiembre finaliza con una ducha fría para el Ejecutivo: **las cifras del paro correspondientes al mes de agosto 2015 experimentan una fuerte alza**, con 20.000 inscritos suplementarios en Pôle Emploi, en la categoría A (los que no han trabajado en absoluto durante el mes).

Tras la débil alza del mes de junio y el ligero retroceso de julio, el Elíseo se felicitaba de haber conseguido “estabilizar” el paro y Myriam El Khomri esperaba ser la primera ministra de Trabajo del quinquenio en anunciar un segundo mes consecutivo de retroceso de las cifras. Pero la ministra, que tiene por misión hacer realidad la reversión de la curva del paro a la que François Hollande ha condicionado su futuro, ve así el paro alcanzar una nueva cumbre histórica, con 3.570.000 inscritos en dicha categoría A.

El mes ha sido muy malo para los mayores de 50 años y el paro de larga duración ha continuado su progresión permanente: en total, más de 2.400.000 personas están inscritas en Pôle Emploi desde hace más de un año.

Sin embargo, hay dos bemoles: el número de inscritos con una actividad parcial (categorías B y C) ha retrocedido, limitando a +8.400 el alza en la totalidad de las categorías, y el empleo de los menores de 25 años, que ha resistido perfectamente.

Este resultado mensual “debe ser analizado con prudencia; sólo cuenta la tendencia: el alza de agosto interviene tras la disminución del mes de julio y la estabilización de junio”, asevera la ministra. De hecho es sorprendente ya que no está en la misma línea que los otros indicadores coyunturales que se han publicado recientemente: el trabajo temporal

prosigue su alza, Francia vuelve a crear puestos de trabajo, las contrataciones de más de un mes progresan y los negocios se han reactivado estos últimos meses.

